

Clases medias, política y democracia

Resumen:

El escenario en América Latina a finales de los años noventa era el de una clase media que había perdido peso, dando lugar a unos nuevos pobres procedentes de ella, y que por otra parte se había escindido entre perdedores y ganadores dentro del nuevo modelo económico. Lo que ha cambiado en la década pasada es que ha aparecido un tercer tipo de clase media, unas clases medias emergentes a partir de la pobreza. Paralelamente se han dado en algunos países fenómenos de polarización política, en los que las clases medias asentadas se han mostrado fuertemente hostiles a gobiernos que no amenazaban sus intereses inmediatos, pero cuyas actuaciones eran percibidas como un riesgo para el mantenimiento futuro de su estatus.

La movilización de las clases medias por sus aspiraciones de futuro frente a los gobiernos que las amenazan plantea a su vez preguntas interesantes sobre la posible consecuencia de la fuerte emergencia de clases medias en América Latina durante la década pasada. A medio plazo las aspiraciones de las clases medias emergentes pueden suponer nuevas demandas y nuevas formas de conflicto. Quizá el primer ejemplo sean las movilizaciones sobre la educación en Chile: el aumento espectacular del número de estudiantes de clase media ha llegado a plantear un problema, ya que los precios de la enseñanza media privada y de la enseñanza universitaria –pública y privada– son muy altos para el poder adquisitivo de las familias.

Palabras clave:

clases medias emergentes, polarización política, conflicto político

Abstract:

In the Nineties of the past century the middle classes had lost weight, giving rise to a “new poverty”, and on the other hand had splitted between losers and winners inside the new economic model. What has changed in the past decade is that a third type of middle classes has appeared, the middle classes emerging from poverty. In parallel they have been involved in some countries in political polarization processes, in which the established middle classes have shown hardly hostile to governments that did not threaten their immediate interests, but whose actions were perceived as a risk for the future maintenance of their status.

The mobilization of the middle classes by their aspirations of future suggest a possible and unintended consequence of the strong emergency of middle classes in Latin America during the past decade. In the medium term the aspirations of the emerging middle classes can suppose new demands and new forms of conflict. Perhaps an example could be the mobilizations on the education in Chile: the spectacular increase of the middle class students number has come to present a problem, since the prices of the private secondary teaching and of the university education –public and private– are very high for the purchasing power of the families.

Key words:

emerging middle classes, political polarization, political conflict

Clases medias, política y democracia*

“Lo que principalmente necesita la ciudad son seres iguales y semejantes, cualidades que se encuentran ante todo en las situaciones medias; y el Estado está necesariamente mejor gobernado cuando se compone de estos elementos, que según nosotros forman su base natural [...] Los Estados bien administrados son aquellos en que la clase media es más numerosa y más poderosa que las otras dos reunidas, o por lo menos que cada una de ellas separadamente. Incliniéndose de uno o de otro lado, restablece el equilibrio e impide que se forme ninguna preponderancia excesiva [...] Otra ventaja no menos evidente de la propiedad mediana es que sus poseedores son los únicos que no se insurreccionan nunca”.

Aristóteles, *Política*, libro VI, capítulo IX

I. Sociología política de las clases medias

Para Aristóteles, amante del equilibrio y de la tendencia hacia el “lugar natural”, era bueno que las clases medias restablecieran el equilibrio social incliniéndose hacia las clases altas o bajas cuando el otro lado amenazaba ese equilibrio. Marx, en cambio, como decidido partidario del cambio social, estaba forzado a ver en esa “fluctuación” de las clases medias un defecto intrínseco que impedía considerarlas como un actor social a título propio.

Podríamos pensar así que Aristóteles inaugura la tradición del estudio de las condiciones sociales favorables al orden, mientras que

Marx es quizá el mejor representante de los defensores del cambio revolucionario. Pero en otro sentido, como se sabe, Marx daba por hecho que el cambio social impulsado por el capitalismo era imparable, y su repudio hacia el papel fluctuante de las clases medias iba acompañado por el convencimiento de que tales clases estaban condenadas a la extinción –a la proletarianización– por la propia dinámica del capital una vez que éste había entrado en escena.

Este planteamiento, patente en los análisis de sus seguidores sobre la “cuestión agraria” (Kautsky, 1899), sería un obstáculo de bastante peso en la definición de la política de los primeros partidos socialistas, al menos hasta que,

inesperadamente, la socialdemocracia sueca se apartó de esta ortodoxia para responder al impacto de la crisis del 29 en la agricultura del país, y aprovechó las diferencias entre los grandes propietarios y los pequeños campesinos para pactar con estos últimos un programa de gobierno.

Después de la segunda guerra mundial, con ritmos y coherencia variables, los partidos socialdemócratas europeos fueron incorporando a sus declaraciones programáticas el hecho de que debían buscar el apoyo de las clases medias, y no sólo ya del pequeño campesinado, sino también de los numerosos pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia o ajena con ingresos medios surgidos del crecimiento económico. De esta forma, las clases medias pasaron de ser un obstáculo al cambio revolucionario a constituir un aliado imprescindible para los procesos democráticos de cambio.

Por otro lado, la perspectiva de Aristóteles renace en la tradición de la sociología política ya no como una apuesta por el orden (cualquier orden), sino como un adelanto de lo que Lipset dio en llamar las condiciones sociales para la democracia (Lipset, 1959 y 1994). En efecto, muchas de esas condiciones están asociadas a la expansión de las clases medias urbanas, incluyendo la mejora de los niveles educativos y culturales. En este sentido se desarrolla la sociología de la modernización, que ve en el crecimiento de las clases medias la

clave para la superación del orden tradicional y la aparición de la moderna y democrática sociedad industrial.

Desgraciadamente, el período de entreguerras había presentado en Europa lo que se puede llamar la anomalía alemana. Una sociedad industrial moderna, dentro de la cual las clases medias tenían considerable peso, había retrocedido hacia el autoritarismo, y además una forma especialmente brutal de autoritarismo: el nacionalsocialismo. El propio Lipset (1960) no duda en señalar el apoyo de las clases medias al fascismo alemán, pero apuntando a dos grupos –el pequeño campesinado y los autopatrones urbanos– dentro de ellas.

Se plantean así varias cuestiones. La primera es la de las diferencias entre estos grupos, que responden al dibujo marxiano de la pequeña burguesía, y otras clases medias, más propias de la modernidad industrial, de profesionales y empleados –incluyendo ejecutivos medios con niveles considerables de ingreso–, cuyo crecimiento numérico se correspondería con el desarrollo de las condiciones sociales para la existencia de democracia. Deberíamos partir entonces de la distinción entre la pequeña burguesía tradicional y las nuevas clases medias (Lockwood, 1958).

En el planteamiento de Lipset, la pequeña burguesía tradicional sería proclive a apoyar a líderes y planteamientos autoritarios en respuesta a un proceso de cambio social por el que se siente amenazada. Al igual que los artesanos

del siglo XIX, cuyo lugar social erosionaba la revolución industrial, habían buscado soluciones utópicas más o menos autoritarias en los primeros movimientos comunistas, la pequeña burguesía del siglo XX habría recurrido al fascismo en respuesta a su pérdida de peso y de estatus con el desarrollo de la moderna sociedad industrial. En este sentido su comportamiento político era reaccionario.

Lipset, por descontado, no obvia la necesidad de analizar concretamente la realidad tanto política como cultural en la que se produjo el ascenso del fascismo alemán. El voto al nacionalsocialismo fue sobre todo protestante, no católico, y provenía especialmente de anteriores votantes de partidos determinados. No se puede aislar el fenómeno, por otro lado, del contexto europeo de crisis de representación, del disfuncional sistema de partidos de Weimar ni del impacto de la crisis económica de 1929.

Surge así una segunda cuestión, más de fondo, que se refiere a los límites de la sociología política. No es posible prever el comportamiento político a partir de un análisis de las clases sociales, sin tomar en cuenta los actores políticos propiamente dichos y el sistema en que estos interactúan. Y no es tampoco posible saber a qué actores políticos apoyarán unas u otras clases sin conocer los problemas económicos y políticos que atraviesa la sociedad. Tiene sentido decir que la pequeña burguesía tiende más a comportamientos reactivos que la nueva clase media, pero eso no nos lleva muy lejos.

Sin embargo, durante los años cincuenta la aproximación fundamental a las clases medias es, al menos en los medios académicos, la vinculada a la teoría de la modernización, una concepción evolutiva y lineal del paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, industrial y democrática, en la que se inserta el texto de Lipset (1959) sobre las condiciones sociales de existencia de la democracia. Y dentro de esta aproximación se buscan ante todo generalizaciones como la de que la expansión de las clases medias es un síntoma y una parte sustancial del proceso de modernización.

Resulta significativa la configuración del pensamiento de Gino Germani sobre el papel de las clases medias argentinas. Huido del fascismo italiano, Germani estudia durante los años cuarenta el desarrollo de las clases medias en Buenos Aires, y publica en 1950 un ensayo dentro del volumen encargado por la Unión Panamericana (precedente de la Organización de Estados Americanos), en el que adopta el voluntarioso optimismo sobre el significado de las clases medias propio de la teoría de la modernización:

[...] la clase media no era siempre e indefectiblemente una "fuerza progresista" [...] Cuando se sentía amenazada por la crisis económica o por las luchas obreras, como en la Europa de entreguerras, podía apoyar a regímenes "totalitarios". Pero Germani confiaba en que seguiría desempeñando

un papel progresista en Argentina, ya que gozaba de un relativo bienestar y, como era de formación reciente, no tenía actitudes mentales tan celosas de las jerarquías como en Europa. La esperanza de Germani era que la clase media pudiera ser una fuerza a la vez progresista (contra los que añoraban el pasado oligárquico) y democrática (contra los abusos del peronismo). Relativamente libre de “actitudes tradicionales”, podría asumir posiciones “dotadas de un mayor grado de racionalidad” (Adamovsky, 2009: 107-108).

Junto con el optimismo, basado en buena medida en la vinculación de la clase media argentina con el fenómeno de la inmigración y la consiguiente carencia de actitudes tradicionales, llama la atención la generalización al hablar de clase media, sin los matices presentes en el análisis de Lipset sobre los apoyos del fascismo alemán. Es cierto que la pequeña burguesía marxiana constituye un concepto insuficiente para explicar la autoubicación como clase media de sectores crecientes de población en Buenos Aires en tiempos del primer peronismo, pero suponer en los empleados –a los que Germani sitúa en la clase media– las mismas actitudes políticas que en los pequeños propietarios podía ser una simplificación excesiva.

Las imprecisiones conceptuales resultan hasta cierto punto previsibles e inevitables en los análisis de las “clases medias”, ya que se

engloban en ellas personas con posiciones muy distintas en la estructura productiva, a las que se supone unificadas por su identidad social (estatus) o por el nivel de ingresos, dejando en segundo plano las diferencias educativas y culturales. Cuanto mayor es la voluntad de darles un perfil con la información empírica existente, mayores son las dificultades para lograr un enfoque analítico conceptualmente coherente (Hopenhayn, 2010a y 2010b).

Pero para esbozar una sociología política de las clases medias puede ser fundamental una distinción entre las clases medias en su relación con el Estado. La pequeña burguesía tradicional teme los impuestos y la inflación, y sólo en un segundo momento depende de la protección del Estado para evitar que el mercado la desplace, especialmente frente a la competencia de los grandes comerciantes o de las importaciones, en el caso del pequeño campesinado. Pero las clases medias profesionales, asalariadas o no, mantienen una relación de dependencia mucho mayor respecto a las políticas públicas.

Esta dependencia no se refiere sobre todo a su nivel de renta en un momento dado, como en el caso de la pequeña burguesía tradicional, sino a la posibilidad de reproducirse, a la posibilidad de transmitir su estatus y sus niveles de renta a los hijos. Para las clases medias caracterizadas por el nivel educativo y el estatus profesional, es necesario que el Estado les ofrezca la posibilidad de dar una educación de nivel alto a

los hijos, y que la economía cree los puestos de trabajo adecuados para ese nivel educativo. En ambos sentidos la acción del Estado (las políticas públicas) puede resultar decisivo.

Podríamos pensar que éste es un problema moderno, característico de nuestras sociedades de la información, pero no es nada evidente que sea así. En Argentina, el movimiento de reforma universitaria de 1918 puede interpretarse como reflejo de la insatisfacción de (los hijos de) las clases medias ante la insuficiencia del sistema educativo tradicional en un momento en que el largo ciclo de crecimiento exportador creaba demandas de nuevas cualificaciones para las que existían buenas oportunidades profesionales. Esta protesta sería una manifestación generacional del malestar de las clases medias (expresado por la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen) frente al mantenimiento del orden conservador y la concentración del poder político en los grandes propietarios.

Si este razonamiento es correcto, habría que matizar el planteamiento de Aristóteles. Puede que las clases medias (los pequeños propietarios) no se insurreccionen nunca, como él pensaba, pero no es evidente que se pueda asegurar lo mismo de sus hijos. Pero, sobre todo, parece necesario adoptar una perspectiva temporal, generacional, para comprender y explicar el comportamiento político de las clases medias. La clave del razonamiento podría ser el tipo de expectativas que desarrollan las diferentes generaciones de las clases medias, y

cómo estas expectativas se transforman en demandas al Estado o en frustración frente a la marcha de la economía.

II. Del autoritarismo de los años setenta a las transiciones a la democracia

La década de los años sesenta fue un período de radicalización política en América Latina. Entre las causas de ese proceso puede señalarse el impacto de la revolución cubana de 1959, en un contexto global en el que las luchas armadas de liberación nacional habían alcanzado un llamativo prestigio cultural tras un período marcado por los procesos de descolonización. La guerra de Argelia, en particular, forzó a los intelectuales franceses a reflexionar sobre tales procesos, y en esos momentos París era indudablemente un punto de referencia para los universitarios e intelectuales latinoamericanos.

Por otro lado, tras el Concilio Vaticano II surgieron con fuerza en América Latina nuevos planteamientos sobre la Iglesia de los pobres, que significaron el desarrollo de una conciencia muy crítica de las profundas desigualdades sociales en la región. Aunque la manifestación más destacada de este cambio fuera la aparición de la llamada teología de la liberación, puede haber sido mucho más influyente el hecho de que muchas instituciones católicas de enseñanza superior dejaran de plantearse

como primer objetivo la reproducción de las élites de la economía y la política y trataran de formar a una generación de jóvenes críticos y solidarios.

Por otro lado, el final de la guerra de Corea supuso una caída de las exportaciones latinoamericanas y la extensión de una percepción negativa del futuro económico de la región. Parece lógico pensar que el pesimismo económico pudo ser un factor decisivo para que entre los jóvenes universitarios se extendieran los planteamientos radicales, incluyendo una visión de la violencia como herramienta legítima para lograr el cambio social. Se podría decir así que fueron los hijos de las clases medias la punta de lanza de esa ola de radicalismo político.

El estancamiento económico de la región, con la notable excepción de México, en la segunda mitad de los años cincuenta y los primeros años sesenta, en términos de PIB per cápita, se produce además en un momento de fuerte expansión de la educación superior, es decir, con un notable incremento del número de personas que aspiran a empleos y oportunidades de clase media (Graciarena y Franco, 1981). Parece lógico suponer por tanto que en ese período se produjo una importante frustración de expectativas en las clases medias de casi toda América Latina.

Graciarena y Franco subrayan con razón el papel de Estado en la creación de las (nuevas) clases medias, pero es importante comprender

que la acción del Estado puede tener efectos contradictorios (consecuencias indeseadas) si incrementa las expectativas de llegar a formar parte de la clase media y no logra crear las condiciones para el cumplimiento de esas expectativas. La frustración resultante de esta paradoja es bien conocida en sociología a partir de un estudio clásico que comparaba las expectativas y las posibilidades reales de ascenso en la fuerza aérea y la policía militar de EEUU (Stouffer *et al.*, 1949).

La frustración de expectativas y el clima de radicalización ideológica se produjeron, además, en un contexto global de guerra fría, en el que la amenaza revolucionaria parecía justificar la ruptura de las reglas democráticas por parte de los defensores del orden. No existían aún, en los países latinoamericanos con fuerte presencia de clases medias, las atroces experiencias que en los años setenta conducirían al redescubrimiento de las libertades y los derechos humanos como valores sustanciales, tanto por los sobrevivientes de la izquierda radical como por los sectores conservadores.

Esta combinación de circunstancias puede explicar no sólo la extensión de los regímenes militares desde Brasil (1964) hasta Argentina (1976), pasando por Uruguay y Chile (1973), sino también el apoyo que tales regímenes obtuvieron, al menos inicialmente, por parte de las clases medias, pese a que los “subversivos” a los que se pretendía aplastar eran en buena medida hijos de esas mismas clases medias. En Argentina, además, el caos en que

degeneró el gobierno de Isabel Martínez tras la muerte de Juan Domingo Perón hizo que las clases medias urbanas interpretaran o desearan la intervención militar no sólo como un freno a la subversión, sino también para desplazar a un gobierno plebeyo que había sido el primero en introducir el terror de Estado, desde la matanza de Ezeiza en el mismo momento del regreso de Perón.

Las tremendas experiencias de represión y violación de los derechos humanos en Chile, Uruguay y Argentina –y en menor medida en Brasil– pueden haber llevado a sectores significativos de la clase media ilustrada a oponerse a los regímenes militares, pero es muy probable que el factor decisivo en el apoyo de las clases medias a las transiciones a la democracia fuera la crisis económica de los años ochenta (en el caso argentino sin duda fue decisiva la derrota de las Malvinas, que apuntilló la credibilidad del régimen militar).

El desorden financiero y la pérdida de sus ahorros llevaron a las clases medias a tomar posiciones de oposición y a movilizarse para exigir el retorno a la democracia: en Chile las caceroladas como forma de movilización de las clases medias aparecen cuando la crisis de la deuda ha puesto fin a la ilusión de haberse integrado en una clase media moderna y global. Se comprobaría en los años siguientes la idea de que los regímenes autoritarios, por su misma rigidez, son más frágiles frente a las crisis económicas.

El hecho de que puedan haber sido los intereses económicos, y no unos sólidos principios liberales, la razón del nuevo giro democrático de las clases medias, no debe quitar peso a sus consecuencias. Desde los años ochenta, y pese a fuertes crisis políticas en varios países de la región, la alternativa autoritaria militar ha dejado de estar en la agenda de América Latina. Ciertamente ha habido excepciones: pese a la celebración regular de elecciones el régimen de Fujimori en Perú fue sin duda autoritario. Y ha habido otros factores de peso a favor de la democracia, comenzando por el fin de la guerra fría y el cambio de perspectiva en Estados Unidos (Paramio, 2001; Pastor, 1992).

Pero en todo caso, tras treinta años en los que la democracia se ha convertido en la única regla de juego en la región, en estos momentos no parece haber razones para que se repita el patrón de polarización política y quiebra de la democracia que caracterizó al Cono Sur de América Latina en los años setenta. Pero, en cambio, en años pasados han sido comunes dos patrones de conflicto que, si bien revelan probablemente la existencia de graves crisis de representación, sin duda ponen en cuestión la institucionalidad democrática: la lógica destituyente y los liderazgos populistas.

La lógica destituyente –utilizando una expresión que se ha hecho común en la política argentina– es la que busca, a través de la polarización política y social, poner fin al mandato de un cargo electo –normalmente el presidente

de la nación— antes de que se cumpla el plazo de su mandato y se realicen las oportunas elecciones. En la región se han producido en años recientes numerosos procesos destituyentes, que con frecuencia han exigido forzar la letra de la constitución para su resolución, y en al menos tres de ellos (el del argentino Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001, y los de los ecuatorianos Abdalá Bucaram en febrero de 1997 y Lucio Gutiérrez en abril de 2005) las clases medias urbanas tuvieron un importante papel en las movilizaciones sociales que pusieron fin a sus mandatos.

En cuanto a los liderazgos populistas, pueden verse como el reflejo especular de los procesos destituyentes: el populismo es el discurso de un líder que asume la representación del pueblo fuera de los partidos preexistentes y frente a ellos. El líder populista no se presenta como un político, ni siquiera si tiene una larga trayectoria previa en política, sino como alguien del pueblo, como el verdadero representante de sus intereses frente a la oligarquía. Y todas las organizaciones políticas y sociales que se presenten como un obstáculo a su liderazgo, o no lo acepten, estarán condenadas a ser englobadas dentro de la oligarquía y de la “partidocracia”, debiendo ser por tanto reemplazadas por otras realmente *populares*.

Si la lógica destituyente niega la legitimidad *de facto* del gobernante, por más que éste posea una plena legitimidad *de iure*, el líder populista, una vez llegado al poder, niega tanto

la legitimidad como la representatividad de la oposición. O bien considera que ésta representa intereses ilegítimos—contrarios al interés nacional— o bien que traiciona a sus representados, utilizando sus votos al servicio de unos intereses distintos de los populares. En este caso es el gobierno, el líder populista, el que provoca una polarización social y política para aislar y deslegitimar a cualquier forma de oposición.

La cuestión es saber cuál es la relación de las clases medias con estas formas de polarización política, y para responderla es necesario en primer lugar tomar nota de los cambios que se han producido en las clases medias latinoamericanas desde la crisis de los años ochenta.

III. Ganadores, perdedores y clases medias emergentes

La hiperinflación en algunos países, y la destrucción de empleo a consecuencia de la crisis de la deuda golpearon fuertemente a las clases medias latinoamericanas. Los planes de ajuste y las medidas previstas en el Consenso de Washington acentuaron este proceso en varios sentidos. Las privatizaciones—normalmente acompañadas de recortes de plantilla— y el redimensionamiento del Estado no sólo supusieron en muchos casos la pérdida del ingreso regular sino también la pérdida del acceso a la sanidad y a otras formas de protección social ligadas al empleo formal.

Klein y Tokman (2000) estimaron que entre 1980 y 1999 la informalidad había pasado del 40,2 al 48,5% de la población empleada en la región. Si definimos la clase media en función del poder adquisitivo y no del tipo de actividad –es decir, si incluimos en la clase media a los asalariados cuyo ingreso familiar es claramente superior a los niveles de pobreza¹–, la pérdida del empleo formal y de la protección social asociada puede haber significado una fuerte disminución de las clases medias en la región.

En Argentina, una sociedad en la que durante los años de Perón se expandió y consolidó una amplia clase media, Minujín y Kessler (1995) hablaron de *nueva pobreza* para describir las consecuencias de esta pobreza. La novedad de esta pobreza no se refería tan sólo a que afectaba a hogares que anteriormente no eran pobres, sino a sus diferentes niveles de educación y cultura, a su autopercepción como clase media en dificultades, a su negativa a aceptar la pérdida de su estatus social anterior. Los nuevos pobres se aferraban a su identidad social aunque hubieran desaparecido las condiciones económicas en que aquella se había asentado, y trataban de mantener su diferenciación cultural incluso en las pautas prioritarias de consumo y a pesar de las restricciones a las que se veían sometidos.

Evidentemente esta clase media empobrecida era una parte muy significativa de lo que podríamos llamar los perdedores en el cambio de modelo económico. Pero también lo eran

quienes permanecían asalariados en los niveles medios y bajos de un sector público que no sólo había disminuido en su peso cuantitativo, sino también en sus niveles de prestigio y de remuneración. Quizá el mejor ejemplo lo ofrezcan los enseñantes de enseñanza primaria y secundaria, desbordados por la falta de inversiones y los bajos ingresos frente al número creciente de estudiantes.

Junto a estos perdedores –expulsados del empleo formal o bien con ingresos y prestigio menguante– también hubo una clase media ganadora con el cambio de modelo. El nuevo dinamismo económico desatado por las reformas estructurales de la primera mitad de los años noventa creó oportunidades para profesionales por cuenta propia y asalariados de los sectores beneficiarios del modelo económico abierto. En Argentina, además, la estabilidad monetaria creada por la paridad del peso con el dólar se tradujo en euforia por la artificial capacidad adquisitiva ganada.

Así, el escenario a finales de los años noventa era el de una clase media que había perdido peso, dando lugar a unos nuevos pobres procedentes de ella, y que por otra parte se había escindido entre perdedores y ganadores dentro del nuevo modelo económico. En muchos casos la escisión era además física, ya que los ganadores cambiaban de residencia, desde los viejos barrios de clase media hacia suburbios residenciales y barrios cerrados, con seguridad privada y servicios propios,

Tabla 1
América Latina (10 países)
Hogares de estratos sociales medios alrededor de 1990 y 2007

País	Año	Con ingreso medio ^a	De estrato medio con ingreso bajo ^b		Estratos sociales medios	Total de hogares (miles)
			porcentajes ^c			
Argentina ^d	1990	25	42	67	2.181	
	2006	54	20	74	3.134	
Brasil	1990	24	22	46	15.825	
	2007	26	27	53	33.454	
Chile	1990	31	23	54	1.702	
	2006	54	16	70	3.645	
Colombia	1991	23	20	43	3.012	
	2005	23	16	39	4.674	
Costa Rica	1990	45	13	58	320	
	2007	50	12	62	834	
Honduras	1990	9	12	21	170	
	2007	11	17	28	544	
México	1989	23	21	44	6.940	
	2006	26	22	48	14.160	
Panamá	1991	39	12	51	260	
	2007	47	12	59	610	
Perú	1997	16	16	32	1.665	
	2003	14	18	32	2.248	
República Dominicana	1997	28	11	39	633	
	2007	20	18	38	1.081	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los países.

^a Hogares en que el ingreso del PPIH supera el valor correspondiente a cuatro veces la línea de pobreza per cápita urbana y es inferior al valor del percentil 95.

^b Se refiere a hogares de estrato laboral medio en que el PPIH tiene un ingreso menor o igual a cuatro veces el valor de la línea de pobreza per cápita urbana.

^c Porcentajes con respecto al total de hogares del país.

^d Gran Buenos Aires.

y desde luego optaban por la sanidad privada y por la enseñanza privada para sus hijos (Svampa, 2001).

Sociológicamente esta escisión no sólo reflejaba la aparición de lo que podemos llamar una clase media globalizada, más próxima

a sus equivalentes de otros países que a la vieja clase media de los suyos, sino que también reforzaba el declive de la clase media “perdedora”. La salida de la clase media ganadora disminuía el valor inmobiliario de los viejos barrios, su actividad económica y su

seguridad y servicios públicos. Y a la vez creaba una división sociológica que puede ser un factor decisivo en la erosión de la confianza interpersonal y del capital social².

Lo que ha cambiado en la década pasada es que ha aparecido un tercer tipo de clase media, unas clases medias emergentes a partir de la pobreza. Entre 1990 y 2007 se estima que en los diez países estudiados por la CEPAL (Franco, Hopenhayn y León, 2011), que suman el 80% de la población de la región, el número de hogares de clase media aumentó en 56 millones, y en países como Brasil y México más que se duplicó.

Aunque se puedan discutir las cifras, tanto por los criterios estadísticos como por la metodología, lo que parece indiscutible es que se ha producido un cambio significativo. Las primeras razones de que haya sido así serían el crecimiento económico sostenido desde 2003 y el crecimiento del empleo formal, más una mejora de las remuneraciones del sector público. Pero existen además factores sociológicos: la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la disminución del número de personas dependientes en los hogares (el llamado bono demográfico) y la elevación de los niveles educativos, que habría disminuido la brecha entre las remuneraciones del trabajo manual y las de los empleos de cuello blanco (López-Calva y Lustig, 2009).

Por otra parte muchos gobiernos han introducido transferencias monetarias a las familias

de menores ingresos, condicionadas a la asistencia de los hijos a la escuela y a los centros primarios de salud. La experiencia es considerada muy positiva, ya que no sólo habría tenido un notable impacto en la reducción de la pobreza sino que habría contribuido a la mejora de los indicadores de educación y salud. Y desde luego se trata de una política social focalizada, en la línea de las recomendaciones del Banco Mundial, por lo que además de requerir una fracción menor del PIB puede contar con facilidades para su financiación (Fiszbein y Schady, 2009).

Si distinguimos entre clases medias perdedoras, ganadoras y emergentes, estaremos en mejor situación para responder a la pregunta que se planteaba anteriormente sobre las posiciones que adoptan las clases medias en los procesos de polarización política. Un primer tipo de conflicto es el que puede enfrentar a ganadores y perdedores sobre las propuestas de apertura económica, a las que normalmente se opondrán los segundos por considerar que perjudica a sus intereses.

Contra lo que se habría podido imaginar, estos conflictos han sido excepcionales, porque en la mayor parte de los casos la apertura económica y las reformas estructurales se produjeron con rapidez y en circunstancias de crisis –a menudo en un contexto hiperinflacionario– en el que aparecían como la única salida posible. Los previsibles perdedores malamente podían defender un modelo anterior que había dejado de funcionar, y en el que

sus ventajas eran a estas alturas más nominales que reales. Por ello los enfrentamientos políticos que se puedan traducir a los intereses contrapuestos de los potenciales beneficiarios y perjudicados por el cambio de modelo han sido pocos y se han producido en países en los que algunos rasgos del modelo anterior habían sobrevivido a los peores momentos de la crisis y a las fuertes presiones liberalizadoras de los primeros años noventa, como Uruguay y Costa Rica.

Quizá el ejemplo más claro de polarización entre ganadores y perdedores fuera el que se produjo en Costa Rica en torno al referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un sector público que había sido eficiente e incluso había creado una opinión pública contraria a una apertura económica en la que se veían algunos aspectos muy negativos, y pesaban menos las posibles ganancias comerciales y en términos de crecimiento económico que aducían los defensores del Tratado. Este se aprobó en octubre de 2008 por sólo un 51,6% del voto, pese a la fuerte presión del presidente Arias y al riesgo que suponía su rechazo de que el país quedara aislado del resto de Centroamérica.

En Uruguay, en cambio, las privatizaciones fueron frenadas desde 1992 por un referéndum, otro rechazó en 2002 la posibilidad de que la empresa estatal petrolera, Ancap, se asociara con inversores privados, y una enmienda constitucional de 2004 estableció que los servicios de agua y saneamiento constituyen derechos humanos

fundamentales y que su gestión debe ser una competencia exclusiva del Estado (Chávez, 2007). Se puede explicar este rechazo mayoritario de las privatizaciones y de la liberalización económica como muestra de una cultura política estatalista, pero es indudable que también refleja la existencia de unas capas sociales que veían como una amenaza el cambio de modelo.

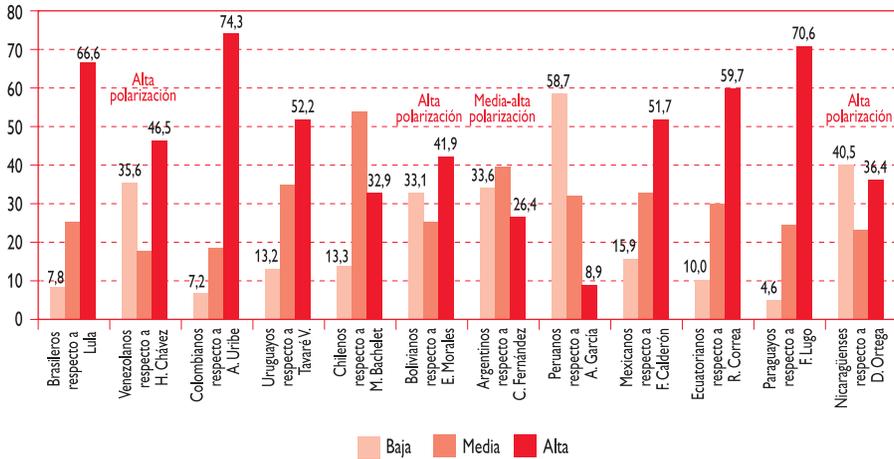
IV. Clases medias, polarización y conflicto político

Un segundo tipo de conflicto es aquel en que las clases medias se dividen en torno a las políticas públicas. En estos casos se da, a la vez que la división de las clases medias, un fenómeno de polarización política en la sociedad. Entiendo por tal la existencia de altas proporciones de la opinión pública simultáneamente a favor y en contra de los gobiernos. Con los datos del Latinobarómetro de 2008, esta situación se daba en Bolivia, Venezuela y Nicaragua, y en menor medida en Argentina, mientras que en otros países era mayoritaria la opinión favorable a los gobiernos (por ejemplo en Brasil y Colombia) o una opinión muy negativa (Perú).

Este tipo de conflicto, el más frecuente en la pasada década, se produce además normalmente en condiciones de crecimiento económico. Conviene subrayar que también el rechazo mayoritario de la opinión peruana

Gráfico 1

Opinión/Estima de la ciudadanía respecto a sus presidentes
Año 2008. Valores porcentuales



Fuente: Latinobarómetro

Baja estima engloba las respuestas que otorgan a sus presidentes –en una escala del 1 al 10– entre 0 y 3; la categoría Media engloba las valoraciones 4,5 y 6, mientras que, quienes otorgan 7, 8, 9 o 10 se agrupan en Alta.

hacia Alan García se produjo en un contexto de alto crecimiento económico, y que en Venezuela la polarización tomó fuerza a la vez que el país volvía al crecimiento tras los años de estancamiento que marcaron el cambio de siglo y mucho antes de la recesión de 2009 y la devaluación de 2010.

No se trata ahora, como en los años 70, de que las clases medias asentadas se sientan amenazadas por un cambio revolucionario del modelo económico y social, aunque la retórica de los gobiernos, en algunos casos, así lo pretenda, sino del efecto, real o temido, de un

conjunto de políticas y de una forma de gobernar sobre las expectativas de sectores amplios de la sociedad, que llevan a una marcada división de la opinión pública a la hora de valorar a los gobernantes.

La primera hipótesis para explicar el fenómeno de la polarización política, en términos de la actitud de las clases medias, sería que las clases medias emergentes apoyarían a los gobernantes a cuyas políticas pueden atribuir su salida de la pobreza y su ascenso social. Ahora bien, esta hipótesis no aclara por qué en algunos casos el resto de las clases medias

deberían oponerse a los gobiernos: ninguna de las políticas que explican la emergencia de unas nuevas clases medias ponen en riesgo la continuidad de las clases medias tradicionales. En particular, las transferencias monetarias condicionadas no han implicado un aumento de la presión fiscal.

Una buena pista sobre las posibles razones de la oposición de las clases medias tradicionales la ofrece el caso venezolano. Las clases medias, que en buena medida habían apoyado a Chávez (un 90% del estrato C era favorable a su gobierno en febrero de 1999, según Datanálisis), se movilizaron contra un proyecto de reforma de la educación que percibieron como un peligro para su existencia:

El momento inicial de las movilizaciones de ciertos sectores de la clase media en contra del Gobierno chavista puede fijarse a propósito de una reforma educativa en el año 2001, materia con gran carga simbólica. El detonante de las protestas y manifestaciones fue el conocido decreto 1.011 (publicado en octubre del año 2000) que contemplaba la creación de un cuerpo de supervisores itinerantes con capacidad de intervenir en diversas actividades de escuelas y colegios. Los padres de familia de clase media lo entendieron como un ataque a la educación privada, como un intento gubernamental de ejercer un control ideológico del sistema educativo (Hidalgo, 2010: 283).

En circunstancias en las que la educación pública no garantiza la formación que los padres de clase media consideran necesaria para que sus hijos puedan mantener ese estatus, cualquier medida que amenace a la educación privada aparecerá como un ataque a la clase media. Como la ampliación y mejora de la educación pública es un objetivo que sólo se puede alcanzar de forma gradual, las clases medias tradicionales consideran que sólo la enseñanza privada se adecua a sus aspiraciones para sus hijos.

Con ello se plantea el problema de las clases medias como grupo cuyos intereses no se limitan a mantener o mejorar sus niveles de ingreso, sino que incluyen de forma muy clara sus expectativas futuras, y en particular la transmisión de su estatus a los hijos. En este sentido, aunque la economía crezca y sus intereses económicos inmediatos se vean satisfechos, pueden movilizarse contra un gobierno que ponga en peligro ese futuro deseado, ya sea atacando sus mecanismos de reproducción social (la enseñanza privada) o adoptando una política económica de la que sospechen puede tener efectos inflacionarios o recesivos.

Esta es la explicación que ofrece De Riz (2010) de la oposición de las clases medias urbanas (y en particular las de Buenos Aires capital) a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner:

A pesar de la coyuntura económica favorable y de políticas destinadas a neutralizar los efectos de la inflación sobre el bolsillo de las clases medias de las grandes ciudades, en las elecciones presidenciales de octubre de 2007 éstas se mostraron reacias a votar por Cristina Kirchner y prefirieron hacerlo por una oposición fragmentada e incapaz de convertirse en alternativa al oficialismo. La demanda de transparencia en la gestión pública, los escándalos de corrupción, la frustrada modernización política, la manipulación de las estadísticas oficiales y *la precariedad de un tipo de crecimiento más orientado a construir el poder personal que a sentar las bases de un desarrollo sostenido*, militaron en contra de la fórmula oficialista (De Riz, 2010: 86; la cursiva es mía).

Desde esta perspectiva, serían la forma en que se gobierna y las incertidumbres sobre la viabilidad del modelo de crecimiento lo que explicaría la oposición de las clases medias urbanas. Sin embargo, las reticencias de 2007 y la derrota del gobierno en las elecciones legislativas de 2009 no se repitieron en las presidenciales de 2011, en las que Cristina Fernández de Kirchner logró una clara reelección. La economía sin duda la favoreció, y en cambio una oposición fragmentada no supo ofrecer una propuesta que asegurara la continuidad del crecimiento y a la vez redujera sus riesgos.

En suma, lo que puede haber sucedido es que buena parte del 40% de ciudadanos que, según datos de 2008, tenía una opinión “media” del gobierno, se decantó por la reelección, por razones económicas y por la incapacidad de la oposición para reducir o ofrecer una alternativa que redujera la incertidumbre sobre el futuro. La lógica destituyente comenzó a perder fuerza tras las elecciones de 2010, ante la incapacidad de la oposición para aprovechar su victoria. Pero es preciso subrayar que la clave de la disminución de la polarización política en Argentina puede haber sido el hecho de que las valoraciones medias del gobierno representaban una parte sustancial de la opinión pública: pese a la existencia de dos polos extremos altamente movilizados, se puede decir que no había llegado a darse una polarización alta.

La explicación de la movilización de las clases medias por sus aspiraciones de futuro frente a los gobiernos que las amenazan plantea a su vez preguntas interesantes sobre la posible consecuencia de la fuerte emergencia de clases medias en América Latina durante la década pasada. A corto plazo puede darse un clima de optimismo compartido por las clases medias tradicionales y las emergentes, si las primeras no ven en peligro su estatus y las segundas experimentan su ascenso social como la realización de sus máximas aspiraciones.

Este parece haber sido el caso brasileño tras los gobiernos de Lula da Silva. Por una

parte, las clases medias emergentes vinculan su ascenso con la acción del gobierno, muestran actitudes más favorables a la política democrática, y en particular expresan un fuerte apoyo al PT (Tavares de Almeida y Nunes de Oliveira, 2010). Por otra, las clases medias asentadas no sólo no se sintieron amenazadas por las políticas de Lula, sino que comparten la euforia por los avances económicos y sociales que han acompañado sus gobiernos.

Sin embargo, a medio plazo se presenta el problema de la sostenibilidad de las aspiraciones de las clases medias emergentes. Quizá el primer ejemplo sea en 2011 el conflicto sobre los precios de la educación –pública y privada– en Chile. El que haya aumentado de forma espectacular el número de estudiantes universitarios de clase media ha llegado a plantear un problema, ya que los precios de la enseñanza universitaria son muy altos para el poder adquisitivo de las familias y los créditos para financiar estos estudios son caros. Surge así una demanda social de bajada de los precios y de extensión de la enseñanza pública gratuita.

La parte más visible del conflicto puede ser la referida a la enseñanza media y superior, pero el origen último del conflicto podría estar en la absoluta insuficiencia, cuantitativa y cualitativa, del sistema público de enseñanza primaria. Así como las clases medias asentadas consideran intocable la enseñanza privada en la que ven la condición necesaria para transmitir su estatus a sus hijos, es inevitable que las clases medias

emergentes demanden un sistema público gratuito y de calidad, y rechacen verse abocados a un sistema privado o público, pero en todo caso de precios altos, que amenaza con hacer inviables sus nuevas aspiraciones.

Aunque las circunstancias sean tan distintas, es sugerente el paralelismo con el desafío que las nuevas generaciones latinoamericanas plantearon al sistema educativo de comienzos del siglo pasado en torno a la reforma universitaria. Como entonces, el éxito del crecimiento económico condujo a una expansión de las clases medias, pero a su vez estas nuevas clases exigieron representación política y sus hijos chocaron con un sistema educativo que no se adaptaba a sus aspiraciones y demandas. Lo que esto sugiere es, ante todo, que las clases medias modernas no son necesariamente un factor de estabilidad –como las clases medias agrarias de Aristóteles–, sino que su crecimiento implica nuevas y ampliadas demandas, y en este sentido pueden ser un importante motor de conflictos políticos.

En particular, dado el contexto de fuerte desigualdad que sigue marcando la región, las clases medias emergentes en América Latina pueden movilizarse ante el riesgo de no poder cumplir sus aspiraciones si el crecimiento económico se estanca o si no se introducen las políticas necesarias para consolidar el avance inicial y transmitirlo a los hijos. La barrera de la pobreza está demasiado próxima, y la consolidación del nuevo estatus exige el paso de las

políticas focalizadas en las rentas más bajas a políticas más generales de las que estos grupos puedan beneficiarse.

Entonces surgiría la necesidad de replantear la lógica que ha guiado las políticas sociales en América Latina desde los años noventa, y la propia filosofía neoliberal de la política social. Para ésta, las políticas sociales universales suponen un fuerte gasto y no benefician tanto a las rentas más bajas como a las clases medias. Por ello, la eficiencia en el uso de los recursos públicos será mayor si éstos se focalizan hacia los grupos de bajos ingresos. Este planteamiento puede ser correcto en lo que se refiere a los subsidios al consumo, pero es mucho más discutible que en América Latina, al menos desde los años ochenta, las clases medias hayan podido beneficiarse de los insuficientes y deteriorados sistemas públicos de enseñanza y sanidad.

En la situación de partida en la región, en todo caso, las políticas focalizadas –como las transferencias monetarias condicionadas–, en un contexto de crecimiento económico, han tenido un notable éxito al permitir escapar de la pobreza a millones de familias, que han pasado a constituir unas nuevas clases medias emergentes. Pero la vulnerabilidad de estos grupos ante situaciones de desaceleración económica obligan a ampliar la red de apoyo social para incluirlos y evitar que una coyuntura económica adversa les haga recaer en la pobreza.

Por otro lado, el carácter aspiracional propio de las clases medias, viejas y nuevas, conduce a una ampliación de sus demandas hacia el Estado. Las clases medias consolidadas pueden seguir recurriendo a la enseñanza o la sanidad privadas, pero las nuevas clases medias necesitan mejores y más asequibles sistemas públicos para poder asentar su estatus. Por otro lado, las clases medias perdedoras en la globalización también se verían beneficiadas por una mejora general de los sistemas públicos.

El problema crucial de las políticas sociales universales, y de la mejora y ampliación de los servicios públicos, es su financiación. Pero si se quiere abordar seriamente un pacto fiscal para hacer posible esa financiación, precisamente la emergencia y las demandas de las nuevas clases medias podrían ser el mejor punto de partida. Una amplia coalición de las clases medias beneficiarias del nuevo modelo de políticas sociales podría ser el núcleo del apoyo a la reforma fiscal.

Referencias bibliográficas

- ADAMOVSKY, E. (2009), "De la academia a la escuela: los inicios de un interés por la clase media en la sociología y la historiografía argentinas y su primer impacto en la educación general", en S. E. Visacovsky y E. Garguín (comps.), *Moralidades, economías e identidades de clase media: estudios históricos y etnográficos*, Buenos Aires, Antropofagia, pp. 95-122
- CHÁVEZ, D. (2007), "Hacer o no hacer: los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil y Uruguay frente a las privatizaciones", *Nueva Sociedad* 207, pp. 63-79.
- DE RIZ, L. (2010), "La clase media argentina: conjeturas para interpretar el papel de las clases medias en los procesos políticos", en L. Paramio (comp.), *Clases medias y gobernabilidad en América Latina*, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, pp. 69-101.
- GERMANI, G. (1950), "La clase media en la Argentina con especial referencia a sus sectores urbanos", en T. R. Crevenna (comp.), *Materiales para el estudio de la clase media en América Latina*, Washington, Unión Panamericana, pp. 1-33.
- FISZBEIN, A., y Schady, N. (2009), *Transferencias monetarias condicionadas: reducción de la pobreza actual y futura*, Washington, Banco Mundial.
- FRANCO, R., HOPENHAYN, M., y LEÓN, A. (2011), "Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día", *Revista de la CEPAL* 103, pp. 7-26.
- FRANCO, R., HOPENHAYN, M., y LEÓN, A. (comps.) (2011), *Las clases medias en América Latina*, México, Siglo XXI.
- GRACIARENA, J., y FRANCO, R. (1981), *Formaciones sociales y estructuras de poder en América Latina*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- HIDALGO, M. (2010), "Clase media y conflictos socio-políticos en Venezuela (1998-2009): una exploración", en L. Paramio (comp.), *Clases medias y gobernabilidad en América Latina*, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, pp. 265-301.
- HOPENHAYN, M. (2010a), "Clases medias en América Latina: sujeto difuso en busca de definición", en A. Bárcena y N. Serra (comps.), *Clases medias y desarrollo en América Latina*, Santiago, CEPAL y Barcelona, CIDOB, pp. 11-37.
- HOPENHAYN, M. (2010b), "¿Cómo cambió la clase media en América Latina? Elementos para el debate", en L. Paramio (comp.), *Clases medias y gobernabilidad en América Latina*, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, pp. 25-57.
- KAUTSKY, K. (1899), *La cuestión agraria*, México, Siglo XXI, 1974.
- KLEIN, E., y TOKMAN, V. (2000), "La estratificación social bajo tensión en la era de la globalización", *Revista de la CEPAL* 72, pp. 7-30.
- LIPSET, S.M. (1959), "Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy", *American Political Science Review* 53, pp. 69-105.
- LIPSET, S.M. (1960), *Political man*, 2ª ed., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1981 [*El hombre político*, Madrid, Tecnos, 1987].
- LIPSET, S. M. (1994), "The social requisites of democracy revisited", *American Sociological Review* 59: 1-22 ["Repensando los requisitos sociales de la democracia", *La Política* 2, pp. 51-87, 1996, y *Ágora* 5, pp. 29-65, 1996].
- LOCKWOOD, D. (1958), *El trabajador de la clase media*, Madrid: Aguilar, 1962 [*The blackcoated worker*, Londres, Allen & Unwin].
- LÓPEZ-CALVA, L. F., y Lustig, N. (2009), "The recent decline of inequality in Latin America: Argentina, Brazil, Mexico and Peru", Working Paper ECINEQ WP 2009-140.
- MINUJIN, A., y KESSLER, G. (1995), *La nueva pobreza en la Argentina*, Buenos Aires, Planeta.
- PARAMIO, L. (2001), "Tiempos del golpismo latinoamericano", *Historia y Política* 5, pp. 7-27.
- PASTOR, R. A. (1992), *Whirlpool: US foreign policy toward Latin America and the Caribbean*, Princeton: Princeton University Press.
- SKOCPOL, T. (1996), "Unsolved mysteries: the Tocqueville files", *The American Prospect* 7 (25).

- STOUFFER, S. A., *et al.* (1949), *Studies in Social Psychology in World War II*, vol. I, *The American Soldier: Adjustment during Army Life*, Princeton, Princeton University Press.
- SVAMPA, M. (2001), *Los que ganaron: la vida en los countries y barrios privados*, 2ª ed., Buenos Aires, Biblos, 2008.
- TAVARES DE ALMEIDA, M. H., y NUNES DE OLIVEIRA, E. (2010), "Nuevas capas medias y política en Brasil", en L. Paramio (comp.), *Clases medias y gobernabilidad en América Latina*, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, pp. 103-118.

Notas

- * Este artículo se inscribe en el proyecto CSO2009-09233 del Plan Nacional de I+D, *Clases medias y gobernabilidad en América Latina*. Agradezco a Cecilia Güemes su análisis de los datos de Latinobarómetro.
- ¹ En el estudio coordinado por Franco, Hopenhayn y León (2011), se ha optado por considerar de clase media los hogares cuyo ingreso es superior a cuatro veces el correspondiente en cada país a la línea de pobreza.
- ² Theda Skocpol (1996) ha argumentado que la erosión del capital social en Estados Unidos es en buena medida consecuencia de la escisión generacional y física de la clase media con el florecimiento de los suburbios residenciales.